

Traducción al español

22 de julio de 2010

Despacho del Secretario General
José Miguel Insulza
Organización de Estados Americanos
1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006

Respetable secretario general José Miguel Insulza:

Nosotros y nosotras, los abajo firmantes, expresamos nuestra gran preocupación por el reciente intento del gobierno de Uribe de impedir el progreso del establecimiento de un diálogo constructivo regional entorno al conflicto interno en Colombia y su impacto en países vecinos. Consideramos que este diálogo, basado en la confianza mutua y el respeto, es esencial para la construcción de una paz duradera en Colombia y para la estabilidad regional.

Organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos y América Latina, así como organismos regionales, incluyendo la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), han trabajado incansablemente para abrir las puertas al diálogo y buscar un enfoque más exhaustivo a la sangrienta guerra civil colombiana de más de 60 años. Lamentablemente, el gobierno de Uribe se ha enfocado, por el contrario, en una política de militarización que ha cobrado un enorme precio humano y material, especialmente para las comunidades afrodescendientes e indígenas de Colombia.

El gobierno de Uribe deja un oscuro récord de derechos humanos que es producto directo de la llamada política de la seguridad democrática, implementada por primera vez en 2003. Junto a las más de 20 mil muertes de combatientes, miles de civiles han perdido la vida, de acuerdo a grupos de derechos humanos. Más de 2 mil muertes extrajudiciales presuntamente perpetradas por las Fuerzas Armadas de Colombia están actualmente bajo investigación de la Fiscalía General de ese país. Mientras tanto, el número de desplazados internos en Colombia ha alcanzado a millones, y cientos de miles de colombianos y colombianas han buscado exilio en países vecinos.

El presidente Uribe también deja un triste record en el ámbito de la política internacional, debido a las acciones problemáticas que ha tomado su gobierno en la arena política y su rechazo a consultar a países afectados antes de tomar estas acciones. La decisión de su gobierno en 2008 de invadir y bombardear el territorio ecuatoriano sin ninguna consideración de la soberanía de ese país produjo una crisis regional que continúa teniendo repercusiones en la actualidad. Su decisión en 2009 de firmar un acuerdo con Estados Unidos, que intensifica la presencia militar estadounidense en Colombia, ha provocado más tensiones con países de toda Suramérica que históricamente han sido cautelosos por cualquier forma de presencia militar estadounidense en la región.

En días recientes, el presidente Uribe una vez más ha escogido provocar a un vecino –en este caso Venezuela- en lugar de propiciar un dialogo necesario. Con la decisión de su gobierno de desempolvar acusaciones repetidas en contra del gobierno de Chávez en un momento crucial de transición que ofrece una oportunidad única para colocar las relaciones con Venezuela en un nuevo camino, Uribe una vez más ha demostrado que prefiere el conflicto antes que el diálogo.

Sin embargo, queremos expresar nuestra esperanza de que la situación interna y las relaciones externas de Colombia puedan mejorar y mejorarán. Sobre el presidente electo de este país, Juan Manuel Santos, indudablemente pesa una parte de la responsabilidad por las políticas de seguridad implementadas por Uribe, dado a que fue el ministro de Defensa de Colombia desde 2006 hasta 2009. No obstante, sus recientes declaraciones, de creerse, sugieren que puede estar dispuesto a pasar la página. Es nuestro deseo, tanto para Colombia como para la futura estabilidad de la región, que una vez que asuma la presidencia, Santos buscará revisar de forma significativa las dañinas políticas de seguridad implementadas por el presidente Uribe, y trabajará en serio para reconstruir las relaciones con el resto de la región.

Con la toma de posesión de un nuevo presidente colombiano a menos de un mes, la esperanza para un cambio real en Colombia se divisa en el horizonte. Exhortamos categóricamente al futuro gobierno colombiano a fomentar un diálogo dentro de Colombia, así como con los países vecinos mientras avanzan en la construcción de una nación más pacífica y democrática. Nada menos se le debe a los miles de colombianos y colombianas que han sido víctimas de este conflicto sangriento o aquellos quienes han sido desplazados o exilados en tierras extranjeras por más de medio siglo.

Sinceramente,

Padre Roy Bourgeois, Observatorio de la Escuela de las Américas (*School of the Americas Watch*)

Chuck Kaufman, Alianza para la Justicia Global (*Alliance for Global Justice*)

Alfred L. Marder, Consejo de Paz de Estados Unidos (*US Peace Council*)

Gene Bruskin, Trabajadores Estadounidenses contra la Guerra (*US Labor Against the War*)

Medea Benjamin, CODEPINK: Mujeres para la Paz (*CODEPINK: Women for Peace*)

Lisa Fuller, Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (*Committee in Solidarity with the People of El Salvador*)

Dale Sorenson, Destacamento Inter-religioso sobre las Américas (*Marin Inter-Faith Task Force on the Americas*)

Mark Weisbrot, Centro de Política Económica e Investigación (*Center for Economic Policy and Research*)

CC: Jefe del Consejo Permanente, embajador Joaquín Maza

Secretario General Asistente, Albert R. Ramdín

Deborah-Mae Lovell, embajadora, representante permanente de Antigua y Barbuda

Martín Gómez Bustillo, representante interino de Argentina

Cornelius A. Smith, embajador, representante permanente de las Bahamas

John E. Beale, embajador, representante permanente de Barbados

Néstor Méndez, embajador, representante permanente de Belice

José Enrique Pinelo Navarro, embajador, representante permanente de Bolivia

Ruy de Lima Casães e Silva, embajador, representante permanente de Brasil

Graeme Clark, embajador, representante permanente de Canadá

Darío Paya, embajador, representante permanente de Chile

Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, embajador, representante permanente de Colombia